

# PLAZA DOMINICAL

Miguel Angel  
Granados Chapa

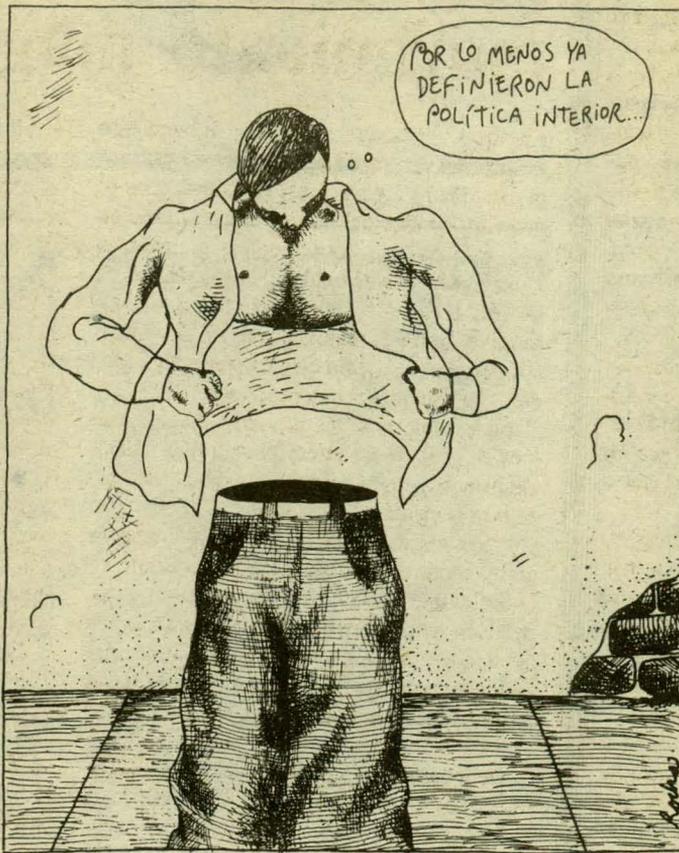
**Lo que es.** En una acción incomprendible, que pareciera suicida —porque aunque les disguste, sus miembros pertenecen a un aparato estatal fruto de esas condiciones y alianzas—, los integrantes del más alto nivel del gobierno actual parecen empeñados en modificar las condiciones de su práctica política y sus alianzas, en tales términos que crece su debilidad al mismo tiempo que aumentan las presiones contrarias al interés histórico que estarían obligados a representar y a defender.

Expliquémonos. Hay una evidente presión norteamericana sobre el gobierno. La encarnó aquí, el jueves, de manera inequívoca, el secretario Shultz. Y en vez de fortalecer sus lazos con los sectores populares que le permitirían resistir a las presiones, el gobierno las dinamita: por un lado, insiste en su línea antibrera y, por el otro, con su política de precios deja insatisfechos a los productores con los aumentos a los granos, y a los consumidores, irritados y asustados por las nuevas alzas, que como siempre, generan otras y otras, en número y monto superiores a lo controlable.

Con la presencia de Shultz aquí se ha provocado un enredo que, cualquiera que sea su punta, deja en claro que una política exterior sin sustento popular se convierte en mamapara verbal vulnerable. Es claro, por un lado, que el interés del gobierno de Estados Unidos y el de México ante el conflicto centroamericano es diverso y hasta encontrado. Sólo coincidirían en caso de que uno persuadiera al otro de que tiene razón, o lo obligara por la fuerza a adoptar su propia opinión.

Respecto del Acta de Paz y Cooperación, como participante en su redacción nuestra cancillería afirma que es un documento suscribible ya, porque incluye los principios y los mecanismos suficientes y necesarios. Estados Unidos sostiene lo contrario. El canciller mexicano dijo el martes 9 que el acta no tiene defectos. Pero viene el secretario Shultz el jueves 11, se entrevista con el presidente de la república, sale de la conversación y él se convierte en vocero de la plática ante los mexicanos. Nuestro gobierno no ha dicho una sola palabra sobre la entrevista, por lo que hemos de atenernos a lo expresado por Shultz. Este dice que el Presidente y él convinieron en que deben hacerse cambios.

Si Shultz manipuló la información, es necesario aclararlo. Si se trata de una confusión puramente verbal, aclárese también. Es verdad que el Acta revisada fue puesta a consideración de los gobier-



## DEFINICION ■ Rocha

nos centroamericanos (únicos que la firmarán, por lo que la intervención de Washington pone de manifiesto su injerencia) que dispusieron hasta el día de mañana para formular observaciones. Estas deberán producir, cuando mucho, afirmamientos en cuestiones adjetivas, de procedimiento. ¿Esos son los cambios a que se refería el secretario Shultz? ¿Mientras él piensa en cambios nosotros hablamos de afinamientos?

Por añadidura, el viernes por la mañana, cuando el secretario de Estado se marchó rumbo a su colonia de Puerto Rico a encontrarse con el Papa, el secretario de Relaciones Exteriores de México no sólo no aprovechó la conferencia de prensa para destruir la maniobra de Shultz, aclarando lo que a su juicio fueran los verdaderos términos de la coincidencia, sino pareció refrendarla, dejando en el ánimo de quienes leyeron sus declaraciones del martes y las producidas el viernes la clara sensación de una mudanza.

Mientras esos escarceos diplomáticos ocurren, la alianza entre el gobierno y los trabajadores presentará al menos una infección en la médula. La requisita y los despidos en Teléfonos, siguen vigentes, al punto de que un dirigente tan precavido como Francisco Hernández Juárez reprocha al Congreso del Trabajo la limitación de sus apoyos. Pero no sólo eso. Empeñado el gobierno en multiplicar frentes, ahora son las condiciones de trabajo de los empleados de los cines las que están en la mira. Es posible apabullar a la opinión pública con la enumeración de aberraciones en la re-

lación obrero-patronal. Por ejemplo, el que se permita legalmente la existencia de *cuijes* explotados por los propios titulares del contrato colectivo es inadmisibles. Pero se procede a manotazos, en vez de con la razón, y el conflicto, que empezó por un incremento salarial negado y el cierre por unos cuantos domingos de las salas del Distrito Federal, deriva hacia la huelga nacional. La exhibición cinematográfica no es un servicio público, y por lo tanto la requisita no procede legalmente. Claro que no era jurídicamente aplicable en el caso de Teléfonos y sin embargo allí está, como realidad inamovible. ¿Se incurrirá en el exceso extraordinario de romper la huelga? ¿Darán las autoridades el paso que no se atrevieron a dar en Teléfonos pero que ya ponen en práctica en los Ferrocarriles, consistente en recortar prestaciones, sean legítimas o no, por meros afanes productivistas? Las respuestas a estas interrogantes dependen de muchos factores, entre otros de la existencia de ingredientes ajenos al control estatal, que los hay, a pesar de lo que creen los operadores de la política.

Véase, como ejemplo de esos últimos lo que está ocurriendo en Puebla, con la creación de un sindicato local de maestros federales, valga la aparente contradicción. Como se sabe, hace cuarenta años varias agrupaciones magisteriales se fundieron en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, organismo de origen rojo cuyos glóbulos blancos fueron aumentando hasta casi la leucemia que hoy padece y luce. Por lo menos una sección, la de Veracruz,

se escindió de él en el pasado y estableció su casa aparte. Pero mediante el reconocimiento de las corrientes (ideológicas, regionales o caudillistas) que lo surcaban, el sindicato creció conservando la unidad. Hasta que en 1972 el golpe de mano de Carlos Jonguitud obligó al SNTE a entrar en una nueva dinámica. Un grupo hegemónico, la Vanguardia Revolucionaria, marginó a todas las tendencias pero no por mucho tiempo, pues la propia tensión creada por el estilo vanguardista hizo que germinaran o reflorecieron agrupaciones y movimientos de disidencia.

No obstante la violencia criminal (no hay que olvidar nunca el asesinato del profesor hidalguense Misael Núñez Acosta) desplegada por el cacicazgo magisterial, la disidencia ha crecido en varias secciones. Pero el de Puebla es hoy un fenómeno nuevo. El comité seccional desgajado la semana pasada del árbol nacional no estaba incluido en las agrupaciones que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ni siquiera la sección 7 de Chiapas, disidente con gran fortaleza, había dado el paso de separarse del sindicato nacional. Y sin embargo lo hacen los poblanos, que de inmediato formaron una agrupación local. Puede que haya en ello indicios de una pugna entre los dirigentes nacionales, Jonguitud y Alberto Miranda, líder formal del sindicato. Miranda actuó en Puebla y está aliado al grupo desplazado del mando por quienes ahora se fueron del SNTE. Acaso Jonguitud no fuera ajeno a esta separación. Pero su sola injerencia hubiese sido insuficiente; a menos que se crea erróneamente que los maestros son borregos sin voluntad. Lo que la escisión poblana significa, a nuestro entender, es que las condiciones de dominación no son eternamente soportables.

Veamos, por último, el asunto de los precios. Ni siquiera el senador Javier Ahumada Padilla, colimense, líder de los pequeños propietarios y aspirante al gobierno de su entidad (tres razones para mostrarse adicto al régimen) pudo reconocer en los nuevos precios a los productos agrícolas el esfuerzo de fomento a la producción a que se refirieron los sonrientes secretarios de Estado que los anunciaron el jueves 11. Pero si los productores, que tienen así sea formalmente quién los represente, pudieron ejercer por lo menos el derecho a reprochar la insuficiencia del aumento, los consumidores no tienen más que asimilar el nuevo y severo golpe contra su economía. A menos que se trate, en realidad, de una medida de profilaxis sanitaria. ¿No el huevo y el aceite y el frijol acrecientan el colesterol y producen flatulencias?